Bogotá D.C., 20 de Julio de 2020

Doctor

**JOGE HUMBERTO MANTILLA**

**Secretario General**

Cámara de Representantes

Ciudad

**Asunto:** Radicación de proyecto de ley **“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CATEGORIA ESPECIAL DE** **CAMPESINO O CAMPESINA, SE EXPIDEN NORMAS PARA SU PROTECCIÓN, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

Respetado Secretario General:

En nuestra calidad de congresistas de la República y en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas constitucional y legalmente, nos permitimos respetuosamente radicar el proyecto de ley de la referencia y, en consecuencia, le solicitamos se sirva dar inicio al trámite legislativo respectivo.

Por los honorables congresistas,

**PROYECTO DE LEY No.\_\_\_**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CATEGORIA ESPECIAL DE** **CAMPESINO O CAMPESINA, SE EXPIDEN NORMAS PARA SU PROTECCIÓN, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

El Congreso de la República de Colombia

**DECRETA:**

**Artículo 1º. Objeto.** Proteger la categoría especial de las personas denominadas campesino o campesina, con enfoque diferencial, con el fin de dignificar su condición y trabajo.

**Artículo 2°. Definición de Campesinos y Campesinas con enfoque diferencial.** Campesino o campesina es la persona naturalque realiza una o varias de las actividades o tareas que pertenecen a la agricultura, la ganadería, pesca, caza, acuicultura, silvicultura, apicultura, zoocría y todas aquellas similares, que generen el setenta por ciento (70%) de sus ingresos anuales, siempre y cuando no supuren los 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) al año.

**Artículo 3°. Campesino intercultural.**

Es aquella persona que se dedica o pretenda dedicarse de manera individual o asociativa a las labores del campo, con un arraigo histórico y tradicional frente al valor de la tierra y sus diversas formas de tenencia, al trabajo, la familia, las buenas costumbres, la cultura, la producción de alimentos para satisfacer sus necesidades o para la obtención de ganancias.

**Artículo 4°. Derechos de especial protección y enfoque diferencial:** El Estado identificara al campesino o campesina que merece especial protección, por que cumple las condiciones del artículo dos (2) de la presente ley, aplicando un criterio de enfoque diferencial tendiente a brindar protección a todos sus derechos y en especial a:

1. **Salud integral:** Propiciando la salud física, social y mental que contribuyen al bienestar y habilidades como persona única.
2. **Alimentación:** Permitir el libre acceso a una alimentación digna balanceada, permanente que contribuya al desarrollo pleno de sus actividades.
3. **Vivienda digna y adecuada:** Conceder una unidad agrícola familiar (UAF) adecuada a sus necesidades habitacionales de acuerdo a sus condiciones ambientales, geográficas y tradicionales de cada región salvaguardando el derecho a la propiedad.
4. **A la Educación:** El estado debe elaborar un marco Nacional que amplié sucesivamente la cobertura y el acceso a la educación preescolar, básica, media y de formación técnico, tecnológico, profesional, especializados y programas encaminados a fortalecer sus competencias, conocimientos, habilidades y aptitudes para su formación integral.
5. **Al Trabajo:** Propiciar y garantizar niveles dignos de producción de ingresos a través del trabajo del campesinado.
6. **A la Autonomía campesina y ancestral en los modos de producción**: Se crearán políticas que protejan e incentiven los modos de producción campesina y ancestral, respetándose sus costumbres y métodos dirigidos a la producción y comercialización de sus productos y semillas, lo cual implica el derecho de almacenar, reservar, utilizar, intercambiar y comercializar sus propias semillas de forma especial aquellas que estén desapareciendo, contara con el apoyo institucional para la preservación de sus costumbres productivas, logrando mantener seguridad alimentaria.
7. **A la Comercialización de su producción agropecuaria:** El estado con el objetivo de reactivar la economía rural y generar empleo en el campo, garantizará la compra y venta de los diferentes productos agropecuarios propiciando un pago justo por los mismos, para lo cual creará políticas y estrategias que dinamicen los procesos productivos y comerciales que permitan abrir escenarios amplios a nivel regional, nacional e internacional.
8. **A la tierra y propiedad privada:** Se protegerá el acceso progresivo a la tierra y su consecuente formalización, como fuente de trabajo, producción y garantía de su mínimo vital y el de su familia que permitan materializar sus prácticas sociales, económicas, ambientales y culturales. El Gobierno Nacional reconocerá y protegerá la posesión ejercida durante los últimos diez (10) años por los campesinos y campesinas en sus fundos.
9. **Al Agua potable, de riego y saneamiento básico:** Garantizara y otorgara el acceso al agua potable, de riego y los servicios de saneamiento eficientes que garanticen la protección de la vida.
10. **A la asociatividad y cooperativismo:** Se promoverá la asociatividad y cooperativismo con el fin de aumentar la competitividad y aumentar la formalización productiva de campesinos y campesinas, creando modelos eficientes que mejoren el acceso a nuevos mercados del sector agropecuario

**Artículo 5°.** El Gobierno Nacional establecerá en el sector central y descentralizado la aplicación y los métodos o las formas como se hará efectiva la política de especial protección al campesinado en derecho a la alimentación, al agua potable, al acceso al servicio a la salud, a una vivienda digna, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al descanso, al acceso a la justicia, a la libertad de locomoción, a la tierra, a la conservación del medio, a la protección de las semillas ancestrales, a la protección de la diversidad , a la participación y toma de decisiones, derecho de participación e información, derecho asociación.

## Artículo 6°. Principio de publicidad. El Gobierno nacional deberá y adelantará las campañas de divulgación y socialización del contenido de la presente ley.

## Artículo 7°. Facultad Reglamentaria. El Gobierno Nacional en un tiempo no mayor a seis (6) meses diseñará e implementará el Registro Único Nacional de los campesinos y campesinas (RUNC), para facilitar el ejercicio de los derechos y la efectividad de la especial protección establecida mediante la presente ley.

## Parágrafo: El Gobierno nacional reglamentará las acciones que ejecutará las entidades del sector central y descentralizado para el cumplimiento del objeto de la presente ley, de forma especial los ministerios encargados de materializar las garantías contempladas en la presente.

**Artículo 8°. Vigencia.** La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.

Por los honorables congresistas,

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

# INTRODUCCIÓN

La base de la humanidad, su proceso evolutivo social tiene su asiento en la ruralidad, en el momento en el que el hombre pasa de ser nómada a sedentario, surgiendo con ello la domesticación de animales, la reelección, la agricultura y el desarrollo económico.(Manrique-Abril, 2008)

La figura que ha marcado los procesos económicos productivos en el mundo es aquel individuo que se le llamo campesino, palabra que conlleva muchas relaciones, recuerda a esa persona con fortaleza, dignidad o bucolismo, humilde y con algún grado de escasez. Esta figura caracterizada en el medievo (edad media) es la que ha sido vendida por todo y concuerda con la idea que se tiene del hombre de campo. (Freedman, 2000)

Colombia ha tenido una dinámica rural compleja que va desde la consolidación de la propiedad en latifundios y minifundios para la exploración y explotación de la tierra a través de la producción de monocultivos como el caucho, la caña, el café, la papa, la cebada bajo la mentalidad adquisitiva y la ocupación de tierras, con mano de obra campesina de origen afroamericana e indígena, que luego de la invasión española fueron ubicados en los denominados resguardos, bajo el esquema de la productividad y el crecimiento económico.(Hirschman, 2011),

El crecimiento económico frente al desarrollo territorial quedo expuesto a la generación de empleo sin considerar la estabilidad y acreencias laborales bajo los principios de solidaridad, equidad y sostenibilidad, además carente de la preocupación por mantener vivas las tradiciones y costumbres del campesinado su inclusión y reconociendo político, al igual que la protección del patrimonio material e inmaterial del habitante rural y por la sostenibilidad ambiental desconociendo el impacto que el conflicto armado ha tenido sobre la vida cotidiana de los pobladores rurales por casi cincuenta años, en donde el campesino ha sido involucrado e incorporado de manera voluntaria e involuntaria en los grupos al margen de la ley y por el estado sin posibilidad de retorno a su entorno rural original a su inclusión política, económica, social y cultural.(Machado, 2009).

Con base a lo expuesto podemos determinar que la migración del campo a la ciudad, la falta de oportunidades, las condiciones de vida precarias, los altos niveles de inseguridad, el bajo cubrimiento de los programas de una seguridad en salud integral, la vivienda digna, el acceso a semillas, la baja remuneración por el trabajo, el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental, la falta de incentivos de acceso a la educación superior, el acceso a la tierra, hacen que la labor del campesino no sea atractiva, por lo tanto no ofrece calidad de vida y no cubre las necesidades que le dan satisfacción. (Díez Jiménez, 2014)

1. **OBJETO**

Por lo anterior, proponemos la creación de una ley cuyo objeto es la protección de la categoría especial de las personas denominadas campesino y campesina, con enfoque diferencial, con el fin de dignificar su condición y trabajo cuyo título propuesto es: **“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CATEGORIA ESPECIAL DE** **CAMPESINO O CAMPESINA SE EXPIDEN NORMAS PARA SU PROTECCIÓN, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.**

El presente proyecto de ley que el campesino o campesina sean considerados dentro del Enfoque Diferencial, teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad, su constante abandono y violación de los Derechos Humanos de forma sistemática debido a su precaria situación, expuesta en la parte motiva del presente documento.

# COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Es competencia del Congreso de la República Hacer las Leyes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política, “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones”: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

1. **JUSTIFICACIÓN PROYECTO DE LEY**

## 4.1. VISIÓN HISTÓRICA DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA

Para hablar del campesinado en Colombia debemos de referirnos a quien o quienes fueron los primeros en ocupar nuestro territorio (Colombia), entonces diríamos que según los arqueólogos, sociólogos e historiadores, Colombia fue paso obligado de migraciones humanas y de animales, es así como se conocen diferentes vías de acceso y salida de los primeros grupos humanos, para mencionar algunos, las costas del atlántico y del pacífico, los ríos magdalena y cauca que comunican con las costas y el interior, el Orinoco para los llanos orientales y Venezuela, el rio Amazonas que sirvió de penetración a muchos grupos provenientes posiblemente de Brasil, Perú y Ecuador. (Salemme & Miotti, 2004)

Aunque en Colombia existe poca información relacionada con las ocupaciones humanas anteriores a 12.000 AP; algunos hallazgos encontrados en la sabana de Bogotá dan cuenta de grupos de cazadores-recolectores procedentes del norte del continente, más o menos de 20.000 y 15.000 AP. (López & Cano, 2011)

Grupos procedentes de Oceanía también poblaron territorios colombianos, en donde algunos arqueólogos encuentran similitudes físicas y culturales con grupos indígenas. Una primera migración **mesoamericana** proveniente de **México** hacia el año 1200 AP, una segunda también **mexicana** posiblemente proveniente del pueblo **Preolmeca** llego a la costa sur del pacífico; los pueblos de lengua **ShibSha, Chibcha, Mosca o Muisca** llegaron un poco antes de nuestra era, procedentes de **Honduras** y **Nicaragua**, los grupos de lengua Arawak salen del norte del Brasil se acentuaron en los llanos orientales, los de lengua Caribe que arribaron del norte del Brasil después de las Antillas pasaron a la costa atlántica de Colombia y luego penetraron hacia el interior por el rio Magdalena, estos pueblos se localizan en climas cálidos y templados, Los descendientes de los quechuas que a finales del siglo XV, invadieron el actual Departamento de Nariño convirtieron esta región en una provincia de Imperio Inca. (Salemme & Miotti, 2004)

Como hemos visto los diferentes pueblos acentuados en Colombia, se fueron organizando en diferentes territorios de acuerdo a su modo de vestir, cultura, lengua, alimentación, podríamos argumentar que se hizo a través de una **regionalización** planificada tal vez, que trajo beneficios a cada uno de los pueblos que se fueron desprendiendo de los primeros grupos étnicos llegados a Colombia; Así las cosas podemos asegurar que la comunidad primitiva alrededor del 500 AP, gracias al cultivo maíz gramínea que se adaptaba fácilmente a todo tipo de clima se inicia en su conformación social un cambio fundamental, se pasa de una sociedad **trivial** **igualitaria** a pequeños reinos, en los que aparecen diferencias sociales eso sí sin la existencia de la propiedad privada, dándole paso a lo que hoy conocemos con el nombre de **“Cacicazgo”** prolongándose hasta la llegada de los españoles; el cacicazgo estaba conformado por barias tribus, comparándolo con nuestros días diríamos una provincia con sus diferentes regiones, un Departamento con sus Municipios.(Palacios & Safford, 2002)

Solo hasta 1821 con la expedición la ley 1ª ***“Sobre extinción de los tributos de los indígenas, distribución de sus resguardos y exenciones que se les conceden”*** se pretendió que quienes labraban la tierra y pagaban tributo fueran los dueños absolutos de las pequeñas extensiones sobrantes en los repartos de territorios. Pero es solo hasta 1832 que se reglamentó la forma de realizar la parcelación, titulación limitando el dominio de dicha propiedad a veinte años antes de poderla vender o enajenar, de esta forma se vio concentrada la población campesina en el sector rural que de acuerdo a datos del censo de 1905, la tasa de crecimiento anual oscilaba alrededor de 13 personas por cada mil habitantes; capitales como Bogotá alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que en el año de 1938 el 70 % de la población residía en el campo y sólo el 15 % en núcleos de más de 10.000 habitantes, al finalizar el siglo XX Colombia tenía una población de 30 millones de los cuales el 30 % de la población nacional era rural. (Machado, 2009)

Esto nos da la referencia que los campesinos y trabajadores rurales son los aborígenes o naturales, los primeros pobladores del campo, considerando que todo nuestro territorio era **rural**, con la llegada de los conquistadores, más exactamente en el segundo viaje de Colon en 1499 llega la colonización con **Alonso de Ojeda** nacido en Cuenca, perteneciente a Castilla la Nueva en España, acompañado de **Juan de la Cosa Y Américo Vespucio**, se introducen costumbres, la minería, nuevas plantas, técnicas de cosecha, y se empieza a **redistribuir** la tierra, se forman las encomiendas de terrenos y se le asigna a los curas, siervos, y militares de la Corona junto a un grupo de aborígenes, se crean los **resguardos** y se dan los primeros desplazamientos de los naturales hacia los años de 1500 a 1600, los despojan de su heredad y son llevados a esta concentración de indios que formaban en cada una de las comarcas establecidas y reglamentadas por los Reyes Católicos. En la época colonial se dan la externalidades del campo, con la puesta en marcha de los pequeños poblados y sus diferentes formas de movilizarse se empiezan a construir diferentes caminos de herradura para comunicarse un pueblo con otro, o simplemente adecuan los ya existentes.(Palacios & Safford, 2002).

Las características actuales evidencian que la tasa de pobreza para el 2015 en el campo fue del 40,3 %, casi el doble de la de las cabeceras, que fue del 24,1 %. Y la tasa de pobreza extrema, es decir, la indigencia alcanzó el 18 % de la población rural, cuatro veces por encima de la tasa de las cabeceras (4,9 %). La situación de pobreza rural se explica, en parte, por las condiciones laborales de su población, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes. En 2015, el promedio de ingreso laboral en la zona rural fue de $439.571, frente a $1.048.367 en las cabeceras. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA), el sector agropecuario colombiano se ha caracterizado por tener un gran número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con poca área, en contraste con un número bastante reducido de grandes unidades de producción con mucha área disponible. El 69,9 % de las UPA tiene menos de cinco hectáreas, y ocupan menos del 5 % del área total censada. Y solo el 0,4 % de estas tienen 500 hectáreas o más, o sea el 40,1 % del área total censada.(DANE, 2018)

El campesino y campesina actual viene siendo reconocido por múltiples organizaciones de carácter internacional y nacional, bajo la aplicación de indicadores de pobreza, desarrollo humano, concentración de la propiedad rural, índices de calidad de vida, nivel educativo, esperanza de vida, entre otros que permiten identificar la vulnerabilidad de las economías rurales familiares y de las poblaciones campesinas que las constituyen además de mirar en prospectiva las políticas públicas, el contexto de la globalización frente a los productos agropecuarios, los efectos del cabo climático, la deforestación, la erosión, pérdida de biodiversidad, lo cual viene modificando los parámetros de los sistemas productivos y la ubicación de las poblaciones campesinas en las áreas rurales, los centros poblados y las cabeceras municipales, así como el futuro de sociedades rurales en donde no se ha podido superar el conflicto armado interno que deja como principales víctimas a los campesinos ahondando los cinturones de pobreza y miseria. (Matijasevic Arcila & Ruiz Silva, 2012)

Actualmente 595 millones de personas habitan en América Latina, de las cuales el 20.5% viven en zonas rurales; y de acuerdo a los resultados del Censo Nacional Agropecuario de 2014 teniendo en cuenta las características sociodemográficas de los productores tenemos que existen 2,7 millones de productores en Colombia, de los cuales, 724 mil son residentes del área rural dispersa, de igual forma 530 mil son jefes de hogar, principalmente hombres, equivalentes al 63,4%, mientras que 306 mil, equivalente al 36,6% son mujeres. Ver gráfico 1. (Echavarría & Villamizar-Villegas, 2017).

## 

Grafico 1. Distribución hombres y mujeres área rural

### **CRISIS DEL AGRO EN COLOMBIA**

*La existencia de una crisis endémica en el sector agrario ha sido ampliamente referenciada por autores como Fajardo (2014, 2015), Molano (2015a) Machado (1998), Ocampo (2015), Giraldo (2014, 2010), entre otros. En síntesis, puede ser demostrada por los siguientes elementos:*

1. *Ausencia y/o acceso precario a la propiedad de la tierra para los pequeños productores y concentración de la propiedad por parte de consorcios empresariales. De acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agrario, “69,9% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 5 por ciento del área censada, mientras que terrenos de más de 500 hectáreas están en manos del 0,4 de los propietarios y representan el 41,1 por ciento de las 113 millones de hectáreas censadas”* (DANE, 2018)
2. *Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados por el Estado Colombiano con los Estados Unidos de América (EUA) y con la Unión Europea, han generado una competencia desventajosa para los productores agrarios nacionales, fenómeno agudizado por un proceso de desmontaje del aparato institucional de acompañamiento a los sectores agropecuarios.*
3. *La irresolución del problema del desplazamiento forzado, en efecto, aunque existe un elevado nivel de subregistro en la población desplazada, el desarraigo ha afectado a 3,6 millones de personas, 836.000 familias, quienes fueron despojadas de 6.638.195 ha desde antes de 1998 hasta el año 2010, equivalentes al 12,8% del territorio nacional, situación que priva permanentemente del ejercicio del derecho sobre los bienes materiales e in-materiales del sujeto despojado, entre ellos, el derecho a la seguridad y la soberanía alimentaria. Vale señalar que según el PNUD el despojo en el 73% de los casos afectó a los pequeños propietarios (propiedades menores de 20 ha), mientras que los medianos propietarios (menos de 500 ha) fueron afectados en 26,6%.*(INDH, 2011)
4. *La pobreza rural que ha llevado a que Colombia sea uno de los países de Latinoamérica y del mundo con mayores niveles de desigualdad en la propiedad de la tierra, expresado en un índice de Gini de 0,875*
5. *La situación de insuficiencia alimentaria, como lo corrobora el Informe Nacional de Desarrollo Humano, que define que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria disminuyó de 1,04% a 0,95% entre 1991 y 2008. “Si el coeficiente es menor que 1, no existe tal autosuficiencia y es preciso cubrir el déficit de alimentos con importaciones provenientes del mercado externo”* (INDH, 2011)
6. *La negativa a respetar los derechos a la territorialidad campesina, indígena y afrocolombiana, como quiera que el Estado, le ha apostado al aceleramiento del modelo de “reprimarización” eco-nómica a través de la denominada locomotora minero-energética, que se demuestra por el aumento significativo en las licencias otorgadas que ocupan un área de 5,8 millones de ha, superior en 1,73 veces al destinado a labores agrícolas; una situación similar ocurre en lo que respecta al uso del suelo en pastos, mientras que entre 1995 y 1999, el área destinada a labores netamente agrícolas disminuyó en 862.060 ha, las destinadas a pastos aumentaron en 8.872.192 ha”.*(INDH, 2011)

## 4.3. ESTÁNDARES DEL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

En el ámbito internacional los campesinos han sido vulnerados por su condición, es por ello que múltiples organizaciones cosmopolitas han realizado diversos estudios enfocados al reconocimiento de su enfoque diferencial, garantía de los derechos campesinos y reivindicación de dicha población. A continuación, resaltamos

### **4.4. Declaración de los derechos de los campesinos**

Han sido múltiples organizaciones entre las que se cuentan el Centre Europe – Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional, quienes buscaron consolidar un camino hacia el reconocimiento de los derechos de los campesinos desde los años 90 y solo hasta el 2008 presentaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la “*Declaración de los derechos de las campesinas y campesinos”*, la cual fue discutida desde el año 2012 durante cinco sesiones de trabajo intergubernamental en el seno del Consejo de Derechos Humanos del organismo. (Dejusticia, 2018)

El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 73° Período de Sesionesadoptó formalmente la “declaración sobre los Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”, dicha declaración, se convierte en la fuente para la construcción de políticas públicas, encaminadas a fortalecer principalmente tres derechos vitales como lo son: el derecho a las semillas, el derecho al agua y el derecho a la tierra. El documento aprobado contiene 28 artículos distribuidos en 6 ejes fundamentales: “ ***i)****derecho a un nivel de vida adecuado;****ii)****derecho a la soberanía alimentaria, lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad;****iii)****adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras;****iv)****derecho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar y/o vender sus semillas;****v)****derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo, y****vi)****derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación*”.(ONU, 2018)

Teniendo en cuenta la declaración de derechos de los campesinos del 17 de diciembre de 2018, la cual no es un documento de obligatorio cumplimiento pues de 54 abstenciones de la Asamblea, Colombia fue una de ellas y ratifico tal decisión el 17 de diciembre en la Asamblea General; por tanto, dicho documento es importante e incide en la normatividad, el trabajo con comunidades campesinas, el fortalecimiento de los proceso organizativos, la reforma rural integral, la paz y la política pública en Colombia.(Dejusticia, 2018).

La Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras, hace un llamado partiendo del hecho que existe un desconocimiento total y parcial del campesino como sujeto de derechos, sujeto político que no goza de un reconocimiento cultural diferenciado; de esta forma deben ser reconocidos los derechos campesinos consagrados en la Constitución Política art 64, 65 y 66, los consagrados en convenios, tratados y pactos internacionales ratificados por Colombia, los contenidos en la Ley 160 de 1994, Ley 101 de 1993, Decreto 1071 de 2015. (Defensoria del Pueblo, 2015).

La sentencia C-077/17 de la corte Constitucionalreconoció a los campesinos y trabajadores agrarios como sujetos de especial protección constitucional.

**4.5. Derechos de especial protección:**

El presente proyecto de ley se enmarca en la protección especial y con enfoque diferencial de los siguientes derechos:

**Salud integral:** Propiciando la salud física, social y mental que contribuyen al bienestar y habilidades como persona única.

Según el censo DANE para el 2018 somos, 48.258.494 personas, son mujeres el 51,2%, el 68,2% se encuentra en edad activa entr02e 15 y 65 años de edad. El 15,8% de los colombianos habitan en sectores rurales dispersos, y un 7,1% en centros poblados. (DANE, 2018) normalmente los campesinos se ubican en estos dos lugares.

Si hacemos algunos cálculos esenciales y simples podríamos decir que hay aproximadamente 7,624,842 habitantes en zonas rurales dispersas, de los cuales 5,200,142 son activos laboralmente, donde la mitad y un poco más son mujeres.

Este grupo poblacional estaría sin la protección laboral y pensional que garantiza los derechos irrenunciables a la seguridad social como lo consagra la ley 100 de 1993.

El artículo 1 de la ley 100 de 1993 reza:  El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

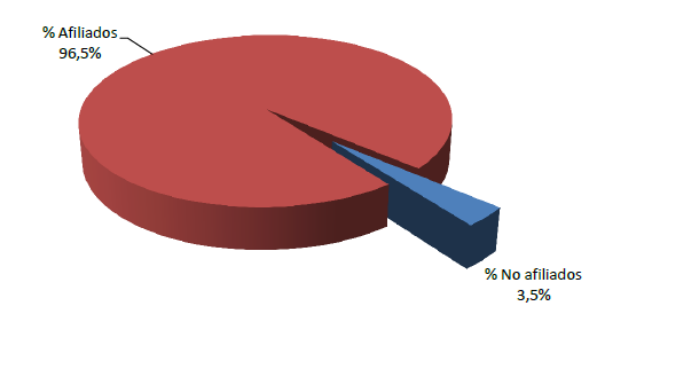
Por lo tanto, los campesinos afiliados al régimen subsidiado están en desventaja frente a los afiliados al régimen contributivo, ya que ellos solo gozan de la protección de salud, dejando a un lado las demás contingencias que se deben garantizar según la ley 100 a saber, pensiones, riesgos laborales, subsidio de desempleo, entre otros.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, entre 500 mil y un millón de personas sufren de intoxicaciones por plaguicidas, con letalidad entre 5 y 20 mil casos año (Eddleston et al., 2002). La exposición ocupacional, con mayor riesgo de intoxicación aguda ocurre en agricultores, peones, obreros y exterminadores de plagas (Bolognesi, Parrini, Merlo, & Bonassi, 1993)

En un estudio realizado en Boyacá por Ospina y Manrique en 2009, (Ospina, Manrique-Abril, & Ariza, 2009) en 654 agricultores de papa, se encontraron las siguientes características en la población estudiada.

El 67,5 % fueron hombres; edad promedio hombres 44,5 años (SD=14,8. Rango 1582), mujeres 42,3 años (SD=15,5. Rango 15-79); 52,8 % eran mayores de 40 años; 78,5 % tenían pareja estable; 92,2 % sabía leer, 51,3 % había cursado hasta 5° grado o menos; familia promedio de 4,5 personas (SD= 2,1); 64 % trabajaba para otra persona; el ingreso personal promedio fue de 207 617 pesos por mes (US$ 112,22 aprox.); 92,7 % estaban afiliados al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), de los cuales el 86,1 % en el Régimen Subsidiado; 48,2 % trabajaba más de 8 horas al día y 24,3 % no tenía día de descanso; 80,5 % no había recibido capacitación en riesgos laborales.

Como resultado del Censo Nacional Agropecuario se estableció que el 95.6 % de los productores residentes en el área rural dispersa se encontraban afiliados al sistema de seguridad social en salud y el 3.5% no afiliados. (ver grafica 2)



*Grafico 2. Afiliados y no afiliados al Sistema de Seguridad*

**Alimentación:** Permitir el libre acceso a una alimentación digna balanceada, permanente que contribuya al desarrollo pleno de sus actividades.

El consumo de energía por parte de quien realiza labores, actividades y trabajo rural campesino involucra un gasto energético que debe ser suplido en la dieta diaria, a fin de recuperar energía y evitar posibles alteraciones negativas en la salud.(FAO, 2008)

La alimentación en Colombia presenta modificaciones debido a las transformaciones sociales y demográficas, la importación de alimento, el consumo de comida “chatarra” con elevado contenido de grasas, azúcar refinado, altos contenidos de conservantes y bajo esquemas de producción industrializados, lo cual ha sustituido en gran medida la alimentación tradicional basada principalmente en productos cultivados en la región de origen principalmente vegetal con bajo contenido de conservantes, productos químicos industriales y que ofrecen una dieta balanceada.(FAO & OMS, 2006)

Desde el contexto histórico; Colombia ha trabajado el tema alimentario desde dos direccionamientos o enfoques de doble vía; por un lado pretende asegurar el acceso inmediato a los alimentos de calidad y en cantidad adecuada a fin de preservar la vida, y por la otra vía se pretende el fortalecimiento de las instituciones a través de políticas públicas a fin de mejorar los estándares de alimentos bajo los principios de dignidad y seguridad alimentaria, basados en los informes sobre alimentación y nutrición desde el año 1967 desde la sexta Conferencia de las Américas hasta el presente, sin tener los resultados esperados frente a los 4 problemas detectados inicialmente como fueron: La desnutrición proteico–calórica en niños, las anemias nutricionales relacionadas con parásitos, las caries dentales y el bocio endémico.(Restrepo-Yepes, 2011). En su momento el Gobierno institucionalizo el Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo PLANALDE y el Plan Nacional de Educación Nutricional y Complementación Alimentaria (PRONECA), como programas de complementación de alimentos donados internacionalmente, para reducir igualmente la mortalidad y morbilidad de niños y madres embarazadas y gestantes, programas con aspectos negativos debido a la baja autonomía del Estado para el diseño de Políticas Publicas adecuadas con las diferentes poblaciones distribuidas geográficamente en un territorio pluridiverso. Posteriormente fue creado el Comité Nacional de Políticas sobre Alimentación y Nutrición en 1972 para diseñar y ejecutar una política nacional basada en los principios de auto sostenimiento de los alimentos ya que hacia el año 1975 el 60% de los niños en Colombia presentaron algún grado de desnutrición, creando de esta manera el Plan Nacional de Nutrición (PAN), el cual no fue tenido en cuenta en la década de los 80 como parte de la política pública de los Gobiernos de turno; solo hasta los años 90 se reconoce la necesidad de dar fortalecimiento a las instituciones encargadas de la seguridad alimentaria y es creado el Plan de Seguridad Alimentaria (PSA) y eEl Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), este último ejecutado por 11 años y articulado al documento denominado Visión Colombia 2019, en donde se incluían familias de estratos 1 y 2 inscritas en el SISBEN; para el año 2008 y con la participación de las comunidades bajo el esquema de asegurar políticas públicas en favor de la alimentación y la nutrición, se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PSAN, cuyo objetivo principal fue *“garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad*” .(Restrepo-Yepes, 2011)

Como podemos ver el estado Colombiano no ha sido Autónomo para generar políticas públicas en torno al aseguramiento de la nutrición y los alimentos, sino que ha dependido de las iniciativas internacionales sin mediar en la continuidad de los programas, como tampoco ha reconocido los aciertos o desaciertos de los mismos, llegando a improvisar en este sentido, programas con alta fragilidad presupuestal y de alcances a la población vulnerable. Por tal razón es de vital importancia reconocer el derecho a la alimentación de la población campesina con enfoque diferencial, patrocinando la disposición de alimentos en cantidades y calidades adecuadas que suplan las necesidades nutricionales de esta población. una alimentación.

**Vivienda digna y adecuada:** Conceder una unidad agrícola familiar (UAF) adecuada a sus necesidades habitacionales de acuerdo a sus condiciones ambientales, geográficas y tradicionales de cada región salvaguardando el derecho a la propiedad.

Es de considerar que a través de la historia se ha logrado demostrar que las familias numerosas se hallan en el campo y en consecuencia se observa hacinamiento, en el sector rural y que dada esa característica se ha hecho necesario suplir esta necesidad con la adecuación de viviendas dignas ya que se han podido comprobar la existencia de viviendas rurales campesinas con apenas 36m2, producto de planes de mejoramiento o de proyectos de vivienda, lo cual deja entre dicho los alcances de estos proyectos y programas realizados por el gobierno a travesadle tiempo desde lo local a lo nacional. Las viviendas campesinas no solo deben ofrecer resguardo a las inclemencias del clima, sino que tengan acceso a los diferentes servicios públicos y provean seguridad (sismoresistentes de acuerdo al RAS 2000 y CNSR 2010) a sus habitantes mejorando la calidad vida de los campesinos con viviendas rurales sostenibles y progresivas ya qu existen hogares con déficit rural cercano al 55%, equivalente a 2.284.31, a pesar del ámbito de la ley 114 de 20016 en donde se asigna recurso para subsidio de vivienda rural en un 20% . (DANE, 2018)

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, en donde se compilo información acerca de los hogares y viviendas rurales correlacionadas con los censos poblacionales anteriores se obtuvieron los siguientes resultados

El 72.8% de las viviendas del área rural dispersa censada están ocupadas, por otra parte, el 82,9 % de estas viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica. El 71,1% de las viviendas se encontraron ocupadas, el 19,8% estaban desocupadas y el 9,1% fueron de uso temporal.El 82,2% de las viviendas en el área rural dispersa se encontraban en las UPA, mientras que el 17,8% de las viviendas se encontraban en las UPNA. (ver gráfico3) Distribución (%) de viviendas ocupadas al interior de los departamentos en el área rural dispersa censada según Unidades de Producción Agropecuaria y No Agropecuaria.

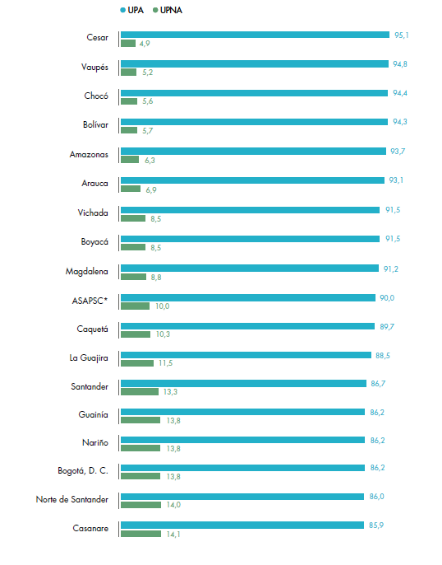


Grafico 2. Distribución (%) de viviendas ocupadas al interior de los departamentos en el área rural dispersa

Respecto a los materiales para la construcción y adecuación de las viviendas se encontró que el 49.1% usan ladrillo, piedra y madera pulida, mientras el 25.5% están construidas con adobe, bareque y tapia pisada, el 18.9% usan madera burda, tabla. El 3,4% usan guadua, caña, esterilla y otros vegetales. Y finalmente el 3.1% usa otros materiales.(DANE, 2018).

Con relaciona la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas ocupadas el área rural un 15.7% no tiene ningún servicio público: (Ver gráfico 4)



*Grafico 4. Distribución (%) número de viviendas ocupadas y que tienen servicios públicos.*

Con relación al número de habitantes de cada vivienda, el 3CNA, considero hogares conformados por una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan parcialmente o total el área de construcción de la vivienda, además comparten los alimentos y suplen sus demás necesidades con cargo a un presupuesto común. De esta manera el promedio de hogares por vivienda es de 1, 032 en el área rural dispersa, además se encontró un 19.1 % de hogares unipersonales con un 50,8% de hogares con menores de 15 años desarrollando actividades agropecuarias.

Un promedio de personas por hogar es de 3,32 en el 3CNA, mientras que en el censo general de 2005 fue de 4,23%, del mismo modo los residentes equivalen a un 48.3% de mujeres y un 51.7% de Hombres. (Ver gráfico 5)

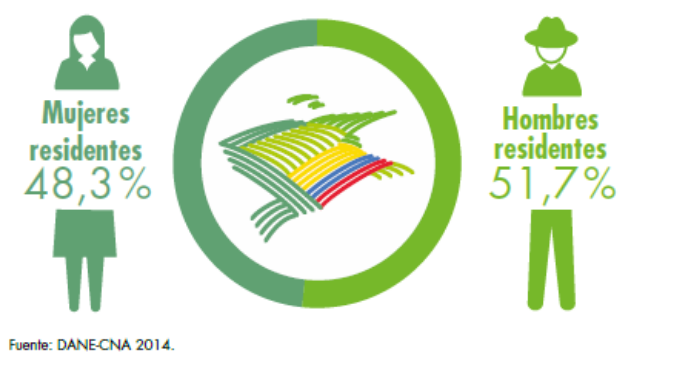


Grafico 3. Censo general de 2005 del área rural

**Derecho al Trabajo:** Propiciar y garantizar niveles dignos de producción de ingresos a través del trabajo del campesinado.

Las labores campesinas están ligadas a la producción y el autoconsumo en las UPA, e implican el mantenimiento del hogar, la finca y el trabajo; situación que es reconocida ya que desde temprana edad el campesino y campesina, ejecuta actividades de responsabilidad en los quehaceres y oficios de la vivienda campesina no remunerados e intercambiados por elementos para la satisfacción personal como vestido, alimentación y educación. (ver tabla 1). Por tanto es necesario gestionar integralmente el trabajo rural, dignificando cada acción y proporcionando los elementos necesario para superar la pobreza ( ver gráfico 6) para optimización del trabajo a través de la incorporación de , riego, maquinaria, nuevas tecnologías amigables con el ambiente, acceso a semillas, encadenamientos productivos de especies vegetales y animales promisorias, precio de sustentación, equilibrio de precios, vías de acceso adecuadas, disminución de la intermediación entre otros.

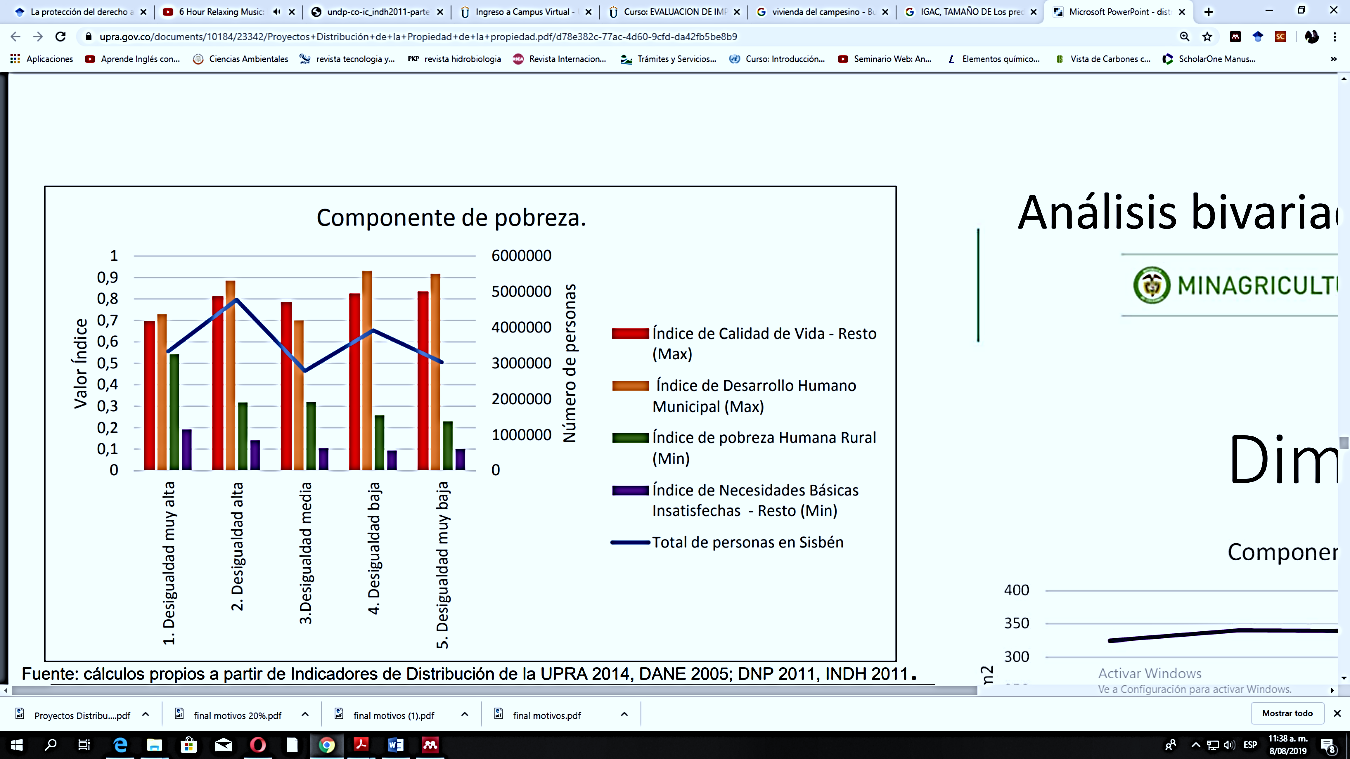
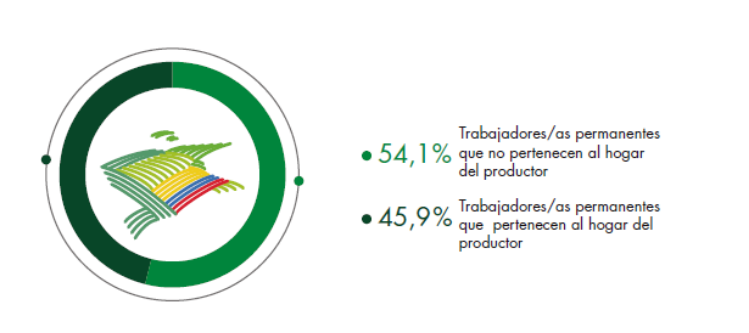
En el 3CNA, dentro de las UPA fueron hallados 4,5 millones de trabajadores/as permanentes, en donde el 77,4% son hombres y el 22,6 % corresponde a mujeres. Dichos trabajadores además reportaron 6,5 millones de jornales adicionales en 122.000 UPA con trabajo colectivo. (ver gráfico 6)(DANE, 2018).

Grafico 4. Componente de pobreza

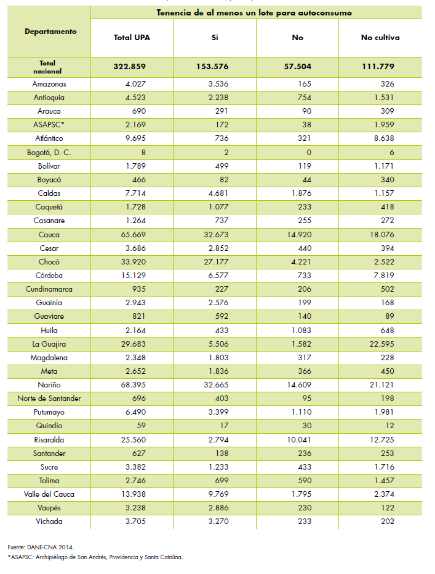
El trabajo colectivo en las UPA menores de 5 ha se hace en un 5,1% y un 92,2 sin trabajo colectivo, lo demás tiende a ser mixto por temporadas.



*Grafico 7. Participación (%) de los trabajadores/as permanentes según pertenecía al hogar del productor.*

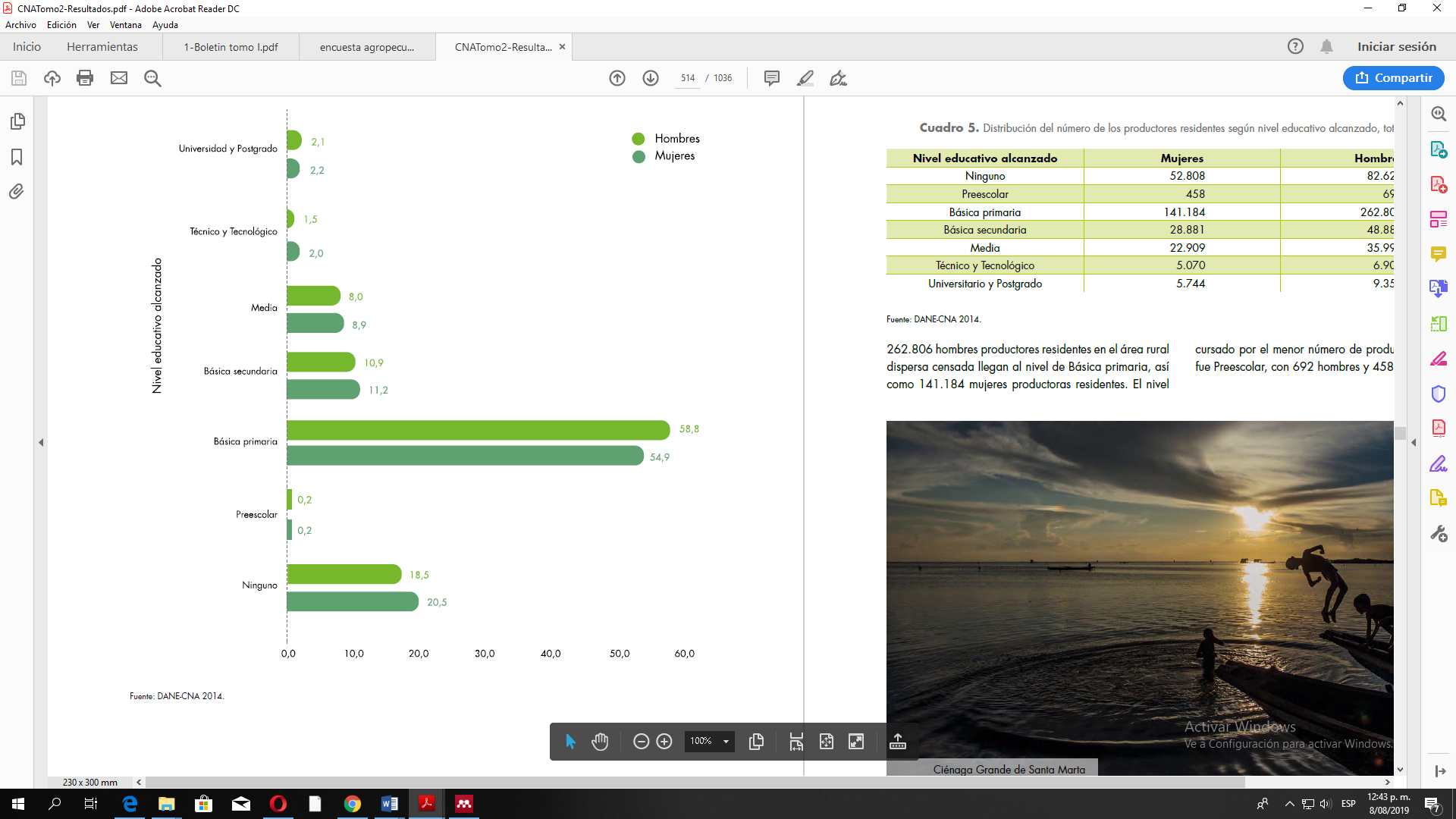
Tabla 1: Unidades de producción Agropecuaria en el área rural dispersa, según tendencia de lote para autoconsumo por departamento.

***Tabla 1. Unidades de producción Agropecuaria en el área rural dispersa***



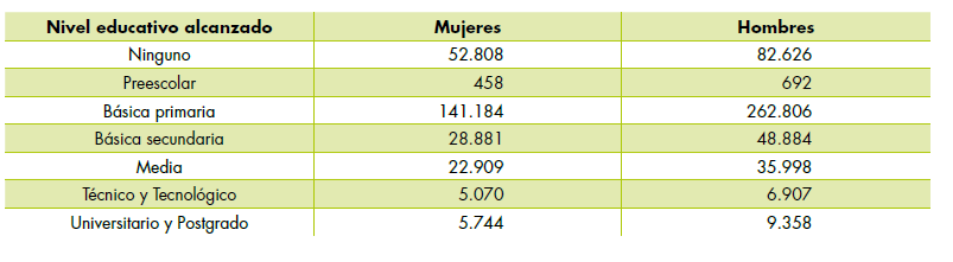
**Derecho al Educación:** Acceso a la educación de formación técnico, tecnológico, profesional, especializados y programas encaminados a fortalecer sus competencias para su formación integral.

En el aspecto educativo es donde se evidencia el enfoque diferencial con que debe ser abordada la problemática de la educación rural y como se deba fortalecer con programas especiales ya que en sus inicios de educación básica se transmite un currículo general, de carácter nacional, que deja por fuera el saber propio de sus pobladores, sus concepciones sobre la vida, el arraigo a la tierra, el territorio, la sostenibilidad ambiental, el trabajo, la familia y la productividad, de la misma forma no se articula su cosmovisión con el currículo y se pierde la esencia de lo que formo la identidad del campesino.(Gaviria, 2017)



La educación rural campesina debe tener el estatus y valor académico similar a los saberes universales pues se deben considerar como saberes con alto valor patrimonial material e inmaterial dada la connotación de identidad de los pueblos campesinos. (Gaviria, 2017).

De acuerdo a los resultados del 3CNA existe un grado de analfabetismo en personas mayores a los 15 años en donde el 16,8% no saben leer y escribir en idioma español y el mayor nivel de educación alcanzado por el 57,4% de los productores residentes en el área rural dispersa es básica primaria, menos del 2% registran estudios técnicos y tecnológicos, pero en cambio se puede observar que existe un porcentaje de 2,1% correspondiente a estudios universitarios y de posgrado; considerando las cifras anteriores es evidente que se debe llegar con educación superior a los campesinos facilitando el acceso a programas especiales o de ser necesario llevar dichos programas al sector rural. (ver gráfico 7)

**Grafico 8. Distribución de los productores según nivel educativo alcanzado

**Derecho a la Autonomía campesina y ancestral en los modos de producción**: Es necesario crearse políticas que amparen, garanticen e incentiven los modos de producción campesina y ancestral propios de cada una de las regiones, salvaguardándose sus costumbres y métodos utilizados para la producción y comercialización de sus productos y semillas; requiriéndose amparar el derecho de almacenar, reservar, usar, intercambiar y comercializar sus propias semillas de forma especial aquellas que estén desapareciendo, para lograr el objetivo planteado, se brindara por parte del estado apoyo investigativo, técnico y científico de requerirse, para la preservación de sus costumbres productivas y mantener la seguridad alimentaria del país.

**Derecho a la Comercialización de su producción agropecuaria:** Es deber del estado con el objetivo de reactivar la economía rural y generar empleo en el campo, garantizará la compra y venta de los diferentes productos agropecuarios propiciando un pago justo por los mismos, para lo cual creará políticas y estrategias que dinamicen los procesos productivos y comerciales que permitan abrir escenarios amplios a nivel regional, nacional e internacional.

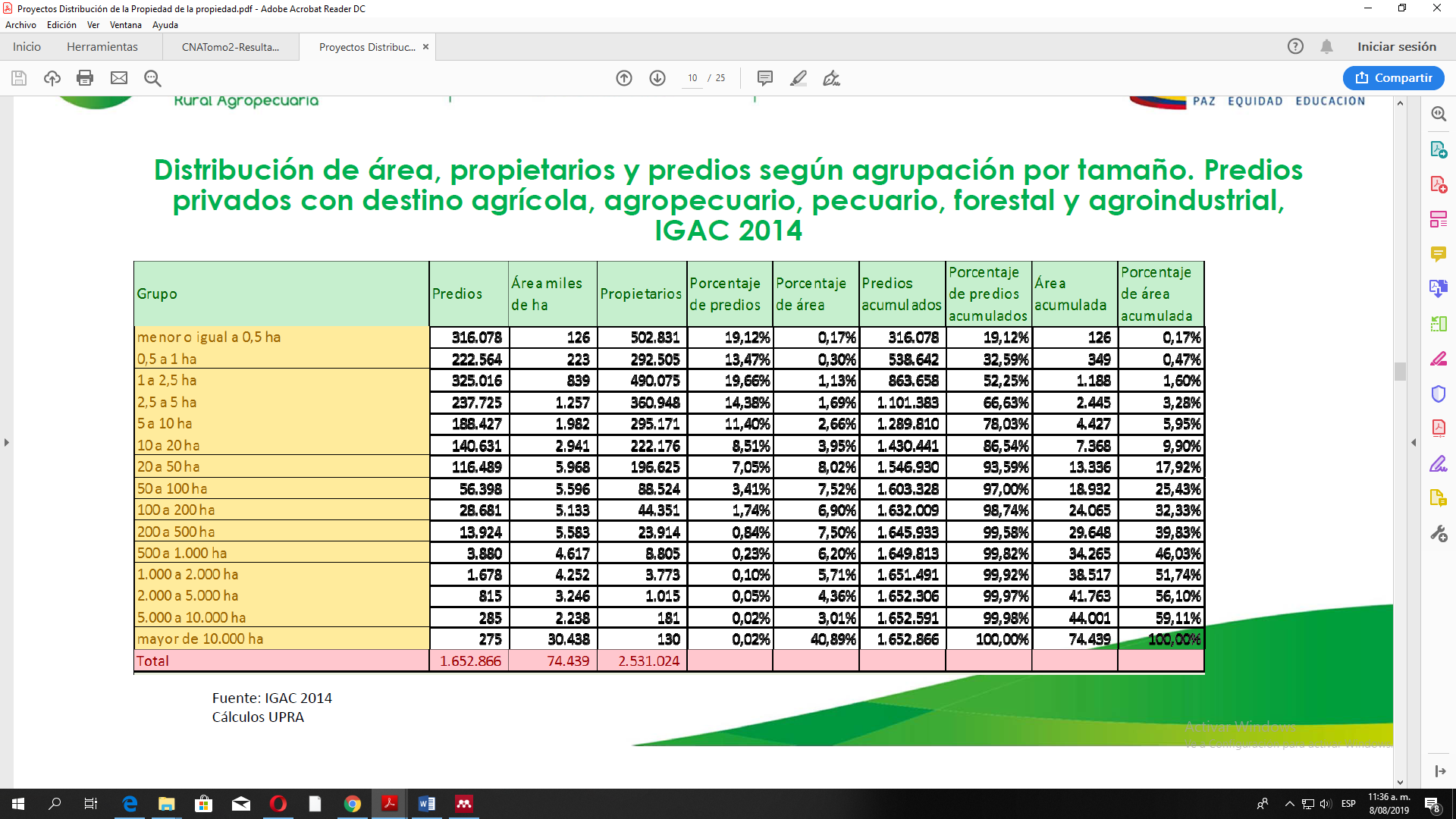
Es deber del Gobierno Nacional reconocer que el sector agropecuario es eje fundamental en el desarrollo de la economía nacional, razón por la cual es fundamental fortalecerlo mediante políticas y mecanismos de especial protección en la dinámica de comercialización de sus productos, lo cual implica la transformación tangible de sus condiciones de mercadeo que permitan obtener remuneración justa y equitativa de sus productos y así contribuir a eliminar índices de pobreza que enfrenta el sector agropecuario durante décadas.

De materializarse una verdadera transformación del campo y la protección de las garantías mínimas de comercialización de los productos agropecuarios se estaría dando un importante avance en el cumplimiento de las garantías constitucionales en favor del campesinado colombiano**,** no se puede desconocerse, que el sector agropecuario históricamente ha contribuido positivamente a la economía Nacional, demostrándose que es el segundo sector económico y social con mayor aporte al PIB, toda vez que cerca del 14 % de las exportaciones nacionales provienen de los campos colombianos sumado la manifiesta contribución a la generación de empleo, por lo tanto se encuentra que es deber estatal cooperar con políticas agropecuarias que brinden herramientas suficientes que robustezcan el gremio y evitar crisis económicas que pongan en riesgo la soberanía alimentaria del país.

**Derecho al acceso a la tierra:** Determinar y otorgar la Unidad Productiva Agrícola (UPA) necesaria para el desarrollo de las actividades del campesinado. El Gobierno Nacional reconocerá la posesión ejercida durante los últimos diez años por los campesinos y campesinas en sus fundos.

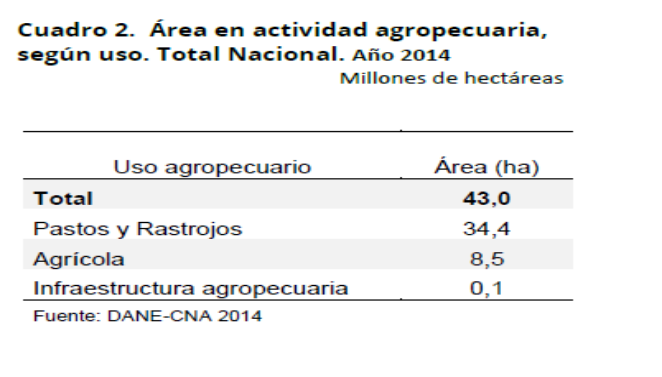
De acuerdo a información del instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la propiedad rural puede ser distribuida de diferentes maneras concentrada o fraccionada, mutimodal o unimodal entre otras y ser distribuida en diferentes tipos de propietarios de acuerdo al uso.(UPRA, 2015).

Por lo anterior se tiene que 2.313.327 predios menores a 3 ha, corresponden a minifundios equivalente a un 65%; minifundios entre 3 y 10 ha, 17,5% equivalentes a 603.293 predios; Pequeños entre 10 y 20 ha 7%, correspondiente a 236.826 predios; predios medianos entre 20 y 200 ha 10%, correspondiente a 361.626 predios y Grandes predios mayores a 200 ha el 1% para un total de 35.276 predios.(UPRA, 2015) (ver Tabla 2)



**Tabla 1. Distribución de área, propietarios y predios según agrupación por tamaño. Predios privados con destino agrícola, agropecuario, pecuario, forestal y agroindustrial, IGAC 2014**

**Tabla 3. Área en millones de ha de acuerdo al uso.**



**Derecho Agua potable, de riego y saneamiento básico:** Garantizara y otorgara el acceso al agua potable, de riego y los servicios de saneamiento eficientes que garanticen la protección de la vida.

Del total de viviendas ocupadas en el área rural censada objeto del CNA 2014, el 82,9% tenían conexión al servicio de energía eléctrica, el 42,5% del total de viviendas tenía acueducto y el 6,0% tenía alcantarillado. La proporción de viviendas que no tenía ningún servicio público fue de 15,7%.

**Asociatividad territorial**: Los campesinos y campesinas se podrán asociar en regiones de planificación agropecuarias veredales y municipales con el propósito de conectar a la población, otorgando incentivos y beneficios.

### **Qué se entiende por campesino.**

La diversidad de conceptos tendientes a definir al campesino y campesina es heterogéneo ya que se basa en los múltiples dimensiones, argumentos, términos, enfoques, características y categorías de tipo económico, cultural, ecológico, ontológicos, axiológicos, religioso entre otras.

Por tanto, determinar el concepto del campesino colombiano como sujeto de especial protección de sus derechos es un reto dada la complejidad frente a su distribución geográfica, tradiciones, orígenes, cultura, la posición de la mujer y los niños en la vida campesina, con características únicas de trabajo y actividades. Pero es indispensable la auto identificación del campesino basado en principios de pertenencia, arraigo, cultura, tradición ¿se siente usted campesino? ¿Vive en territorio campesino? ¿Su familia es campesina? ¿Desarrolla actividades propias del campo? *O si por el contrario* quiere ser campesino.

En este sentido partimos del concepto técnico adoptado por Colombia en el año 2016 bajo el marco de la Mesa Campesina del Cauca, con participación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ministerio de Interior, Ministerio de Agricultura, DANE y Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Cultura como insumo para la inclusión del campesinado en el Tercer Censo Nacional Agropecuario (3 CNA) , en donde se abordaron 4 dimensiones para su caracterización; dimensión sociológico-territorial, dimensión socio-cultural, dimensión económico-productiva y la dimensión organizativo-política. (ICANH, 2017).

Resultado de la mesa técnica se adoptó la siguiente conceptualización de campesino en función del CENSO:

*“El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional.”*

Del mismo modo y teniendo como base los principios y derechos adoptados El artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos establece:

*“Campesino es un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos”*

# FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE DIFERENCIAL

La oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas – Derechos Humanos de Colombia ha definido el enfoque diferencial con doble significancia, en la que en primer lugar es considerado como un *método de análisis en donde se hacen visibles “las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico” ;* y en segundo lugar bajo el análisis inicial se desarrollan una serie de acciones encaminadas a brindar adecuada protección de los derechos de una población.

Dada la definición anterior, el *enfoque diferencial permite visibilizar la violación a los derechos humanos en cualquier intervalo y evento histórico sobre una población evidenciando de igual forma la ausencia de políticas públicas entre otras, apelando al Derecho Internacional, en donde se enfatiza el reconocimiento a poblaciones y grupos de necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asimetrías de las sociedades históricamente constituidas a las que pertenecen.*

## Ventajas Del Enfoque Diferencial

El enfoque diferencial basado en la igualdad y no en la discriminación, derivado del derecho a la igualdad “*“darle a cada quien lo suyo de acuerdo a sus necesidades”*, se reconoce como un método de análisis para priorizar y definir elementos de especial protección en las poblaciones y grupos de personas, se convierte en el instrumento para generar políticas públicas dirigidas al goce efectivo de los derechos de los campesinos en este caso, en donde se debe considerar sus modos de vida, sus tradiciones y costumbres, sus relaciones socioculturales con la tierra y el territorio, sus propias formas de organización y producción de alimentos. (Defensoria, 2014)

Del mismo modo el enfoque diferencial, “*Permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que dichos seres humanos individualmente o como comunidad enfrentan. Facilita el desarrollo de programas que permitan entender las características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunden en una adecuación de las de las modalidades de atención a los mismos permitiendo la integralidad de la respuesta estatal.” Permite realizar acciones positivas que no solo disminuyen las condiciones de discriminación, sino que apuntan a modificar condiciones sociales, culturales y estructurales.”*(MININTERIOR, 2016)

Por otra parte, la Secretaria Distrital de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá acierta al definir el enfoque diferencial así:

*“El enfoque diferencial es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los/as distintos/as actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez); bajo los principios de igualdad, diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad”* (Secretaria de Salud Bogota, 2012)

## Principios del Enfoque Diferencial

***“*Principio de igualdad:** *La igualdad en el entendido como la relación de equivalencia, en el sentido de que las personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son “iguales”; equivalencia no quiere decir identidad, sino más bien homologación****.***

*Se busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre la igualdad real y efectiva. La Corte Constitucional ha señalado insistentemente que la atención diferencial constituye* ***“el punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión.***

**Principio de Derechos:** *Significa que las Políticas Publicas sea entendida como un instrumento para la garantía de los* ***derechos******fundamentales*** *(salud, educación, trabajo, vida digna, entre otros).* ***El******Estado*** *asumiendo las* reglas *institucionalidad* existentes, útiles para organizar la sociedad, pues *tiene la obligación de edificar las respuestas que respondan a las necesidades fundamentales de la población,* ***compensando las situaciones de desigualdad que se dan en los enfoques del hombre y de las mujere.***

**Principio de Equidad:** *caracterizada por la igualdad, el respeto, la justicia y la gestión responsable del Estado, construyendo normas que reconozcan la existencia de diferencial e injustas en términos de oportunidades de ejercer plenamente la Autonomía entre grupos poblacionales, estamentos sociales, cerrando la brecha de superación e inequidad de las clases sociales, etnias, identidades de géneros, raza, territorios, orientaciones sexuales y condiciones de discapacidad.*

**Principio de Participación Social e Inclusión:** *Promueve la ciudadanía plena a través del ejercicio de una democracia cotidiana, que garantiza plena libertad a los ciudadanos/ as para participar de manera incidente en la definición y ejecución de las políticas públicas* que permitan calcular la esencia de la unión de uno o varios conglomerados sociales, mediante los mecanismos básicos de participación ciudadana del Estado Social de Derecho.

## Una política diferencial de protección y atención debe contemplar:

* Promover la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el acceso equitativo a los recursos y los servicios de salud.
* Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo particular y actuar sobre ellas.
* Promover el acceso den forma equitativa en a la toma de decisiones, a la participación y a la organización.
* Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas, con particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente subordinados.
* Eliminar los estereotipos que obstaculicen el libre ejercicio de los Derechos y la inclusión social.*”*

# MARCO JURÍDICO

Desde tiempos inmemoriales a nivel mundial se ha buscado el reconocimiento y amparo a toda persona que labra los campos, es por ello que varios movimientos campesinos han trabajado incansablemente durante los últimos quince años en la protección especial y amparo a sus garantías como sector vulnerable de nuestras comunidades mundiales; en este punto es pertinente hacer alusión a la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales la cual fue adoptada el 17 de Diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU.

Una vez culminado el proceso iniciado por las comunidades rurales a nivel internacional, se marca un precedente positivo en favor del campesinado, con 121 votos de apoyo, 8 votos en contra, y 52 abstenciones, se logró avanzar en la dignificación del quehacer rural y fortalecer las comunidades campesinas que tanto contribuyen al dinamismo económico del mundo; pese al clamor de muchas organizaciones sociales y al vacío legal que existe en nuestra legislación Colombia constituimos uno de los Estados que se abstuvo de votar tan importante declaración, situación que mostro la falta de compromiso político con el sector Rural y que desencadeno fuertes críticas al Gobierno Nacional de Turno.

Sin embargo, la Declaración internacional brinda un fuerte apoyo al campesinado colombiano, por cuanto constituye herramienta jurídica contenida de principios y parámetros de interpretación que pueden ser acogidos en la toma de decisiones judiciales, legislativas y políticas cuando se encuentre afectada la población rural, pese a no ser de obligatorio cumplimiento para nuestro estado se ha generado un ambiente de presión en la consecución de políticas públicas que resulten útiles en la resolución de asuntos en los cuales se encuentren involucrados nuestros campesinos; además coadyuva a impulsar y avalar las iniciativas legislativas que versan sobre garantías y protección de los derechos del campesinado que día a día se engavetan en el congreso de la Republica y que truncan el desarrollo de las organizaciones de dicho sector.

Así las cosas, se persigue un goce efectivo a nuestros campesinos de sus garantías y derechos que obligan a los Gobiernos Nacional y Departamentales a ejecutar políticas públicas concretas, reales y efectivas que permitan abandonar el rezago en el cual se ha mantenido durante décadas, de tal suerte que la Declaración constituye un instrumento normativo internacional que otorga lineamientos que nos admite crear, desarrollar y fortalecer políticas con especificidad que atienda las necesidades de campesinas y campesinos que permitan desarrollar capacidades sociales, económicas, políticas, comunitarias sobre la base de un enfoque diferencial que alcance el mejoramiento de procesos de producción y comercialización agropecuaria encaminados a alcanzar una calidad de vida y la dignificación del trabajo del sector campesino, minimizando los índices de pobreza y abandono que han rodeado dicha población.

Por otra parte, debemos analizar nuestra carta magna en cuanto al contenido de reconocimiento a los derechos campesinos, encontrando que a partir de la vigencia de la constitución de 1991, en el capítulo II se consagran los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, estableciendo el derecho a la propiedad como uno de ellos; en dicho precepto constitucional se impuso el deber estatal de propender por el acceso progresivo de la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios y generar garantías de bienestar a dicho sector dentro del marco del estado Social de Derecho y dar cumplimiento a la disposición constitucional que determina en: ” Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

De lo anterior, se deriva la protección especial constitucional a la población campesina, mejorando su ingresos y calidad de vida, tal y conforme lo establece la constitución Política así: “Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.”

El estado colombiano desarrolla protección constitucional especial a los derechos de los campesinos, por cuanto lo constituye como grupo social especifico con un alto grado de vulnerabilidad que requiere un trato diferencial que le permita materializar plenamente sus derechos Humanos, tan es así que desde la Constitución Nacional se busca proteger su productividad y avance económico que le permita tener una vida digna y de acuerdo a la disposición legal que determina: “Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.”, por lo anterior se encuentra pertinente y necesaria una legislación que recoja el sujeto campesino como titular de derechos con enfoque diferencial y enaltecer la labor de nuestros campesinos y campesinas que aportan al desarrollo de un país.

La Corte Constitucional en sus diferentes fallos ha considerado reiteradamente la necesidad de reconocer la cultura campesina en nuestro territorio nacional y reclama la protección de su acceso a la tierra y demás garantías que se desprenden de su cultura diferenciada y trascender al reconocimiento de sus derechos específicos.

*La jurisprudencia constitucional ha considerado vehementemente que la actividad agraria debe ser sostenible y ha tomado atenta nota de los riesgos que conllevan el mercado actual de los productos lo cual ha generado atrasos de gran impacto a su dinamismo económico y aumento en las brechas sociales que amenazan la soberanía alimentaria, la diversidad étnica y cultural de la nación que ponen en entre dicho el valor real del progreso perseguido en las disposiciones Constitucionales; toda vez que la realidad social refleja anulación de su economía tradicional de subsistencia a partir del autoabastecimiento y el encarecimiento de su forma de vida.*

*Al respecto, es pertinente destacar la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional la cual ha señalado que:*

*“Esto implica que el Estado debe, en principio, respetar las formas tradicionales de producción de los campesinos y el aprovechamiento de su propia tierra; facilitar a estas personas el acceso a los bienes y prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente (i.e. créditos, asistencia técnica, herramientas de producción, tecnología); y garantizarles, cuando no se encuentran en capacidad de hacerlo autónomamente, las condiciones mínimas materiales de existencia. Como lo ha sostenido esta Corte, estas obligaciones en cabeza del Estado se justifican porque lo que está en juego es la capacidad que tienen los trabajadores agrarios para garantizar, mediante sus formas tradicionales de generar ingresos (i.e economías de subsistencia), su derecho fundamental al mínimo vital.*[[1]](#footnote-1)

*Ahora bien, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional, el mínimo vital guarda una relación intrínseca con el derecho al trabajo de las comunidades campesinas.*[[2]](#footnote-2) *Para la generalidad de las personas, este vínculo se sustenta en una relación instrumental para garantizarse una calidad de vida específica.*[[3]](#footnote-3) *Para las comunidades campesinas, no obstante, esta Corporación ha reconocido que el trabajo también se vuelve un fin en sí mismo, ya que su identidad, relaciones sociales y configuraciones culturales se entretejen alrededor del trabajo de la tierra.*[[4]](#footnote-4) *Así, el trabajo no es para los campesinos una simple profesión u oficio que se ejerce, entre otras actividades, en determinados momentos y circunstancias; sino que se trata, por el contrario, de uno de los rasgos distintivitos de su forma de vida. De ahí que ellos se conciban a sí mismos como trabajadores agrarios.*[[5]](#footnote-5)

*De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, varias disposiciones constitucionales reflejan la protección reforzada que la Constitución Política le otorga al trabajo.*[[6]](#footnote-6) *El derecho al trabajo, por lo tanto, tiene una triple dimensión en nuestro ordenamiento jurídico: es una directriz que orienta las políticas públicas; un principio rector que informa la estructura de nuestro Estado Social de Derecho; y es un derecho y un deber social que tiene un contenido de desarrollo programático, de una parte y, de la otra, un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental.*[[7]](#footnote-7)

*De lo brevemente referenciado, se tiene que la Corte Constitucional en sus diferentes fallos ha reconocido en el campo, más que un espacio geográfico, un bien jurídicamente tutelado, el cual debe ser amparado, con miras a garantizar el conjunto de derechos y prerrogativas de las personas que dan lugar a esa forma de vida de los trabajadores rurales amparada constitucionalmente.*

*Por su parte, la ley 1955 de mayo 25 de 2019, por medio del cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, en sus artículos 252 y 253 se determinó que el Gobierno Nacional construirá una política pública para la población campesina, con el objetivo de formalizar la actividad agropecuaria; lo cual ha generado gran expectativa y esperanza en nuestro campesinado de mejorar sus condiciones de vida y por ende lograr cerrar brechas de pobreza.*

*Finalmente, es importante mencionar la Directiva No. 007 emitida el once (11) de Junio del 2019 por la Procuraduría General de la Nación, la cual se dirigió a los funcionarios del ministerio público, autoridades públicas Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales y servidores públicos, mediante la cual se exigen lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos campesinos, arguye que dentro de sus funciones constitucionales se encuentra el deber de vigilar el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos para proteger los derechos humanos y su efectividad.*

*Referencia disposiciones Constitucionales artículos 64 y 65 de la Constitución Política y enfatiza en los pronunciamientos jurisprudenciales, reafirmando que los campesinos y trabajadores rurales son sujetos de especial protección, en atención a las constantes condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente; referencia que las organizaciones campesinas y otras asociaciones que promueven el bienestar de la población en el sector rural del país, han manifestado la necesidad de aumentar las acciones gubernamentales para superar las condiciones deficitarias que viven desde hace décadas.*

*En uso de sus facultades legales adopta acciones encaminadas a garantizar el reconocimiento, promoción y respeto de los derechos del campesinado y dispuso:*

*“PRIMERO: RECONOCER al campesinado colombiano como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección constitucional, en los escenarios determinados por la Corte Constitucional, que aporta a la economía del país, construye alianzas y articulaciones con otros sectores y conserva la biodiversidad y los ecosistemas locales del país.”; igualmente insta a las distintas autoridades administrativas a crear planes, programas, estrategias y políticas públicas en favor del efectivo reconocimiento de los derechos del campesinado, a las autoridades públicas las exhorta para que en virtud del principio de progresividad y prohibición de regresividad se ejecuten medidas urgentes para evitar la limitación desproporcionada de las garantías y derechos reconocidos a los campesinos, exigiendo acciones expeditas que lleven a la efectividad y goce pleno de los mismos.*

# Línea Jurisprudencial Corte Constitucional

La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones reconociendo a la población campesina y trabajadores rurales como una población que necesita una protección extensiva de derechos, ejemplo de ello tendemos:

## Derecho al desarrollo

La sentencia T – 445 de 2016 afirma que este derecho es una finalidad en si misma creando un ambiente propicio para el desarrollo de la vida en condiciones de Dignidad humana, en especial, el Estado debe adoptar medidas eficaces para lograr la garantía de este derecho especialmente en los derechos más básicos.

### Sentencia T-445/16

*“DERECHO AL DESARROLLO-Finalidad: El objetivo básico del derecho al desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, es decir, para la materialización de esta garantía se necesita atender las necesidades básicas de las personas como la salud, la vivienda y, en sí, la protección a los derechos humanos. En otras palabras****, el desarrollo se garantiza permitiendo el acceso a los recursos y servicios básicos tratando de proveer una distribución justa y equitativa de los mismos.*** *(negrita fuera de texto)”*

*8 Evolución del derecho al desarrollo y modelos alternativos del mismo.*

*8.1. Conforme lo estableció la “Declaración sobre el derecho al desarrollo” proferida por la Asamblea General de la ONU (Resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986), el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos. Con este objeto el artículo octavo de la citada disposición precisó que: “****Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales”.***

*El objetivo básico del derecho al desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, es decir, para la materialización de esta garantía se necesita atender las necesidades básicas de las personas como la salud, la vivienda y, en sí, la protección a los derechos humanos. En otras palabras, el desarrollo se garantiza permitiendo el acceso a los recursos y servicios básicos tratando de proveer una distribución justa y equitativa de los mismos.*

*Conforme lo ha precisado un sector de la doctrina, el concepto desarrollo puede ser entendido desde diversas perspectivas, todas ellas ligadas a la trasformación de las condiciones de vida de los habitantes. En este sentido Antonio y María Wolkmer precisaron:*

*“El concepto de “desarrollo” se ha prestado a diferentes interpretaciones que pueden expresar crecimiento económico, proceso histórico o dinámica de modernización. Así, el desarrollo económico y social está identificado con cambios en la estructura tradicional, de sociedades caracterizadas como atrasadas en la importación de nuevas tecnologías y en la promoción racionalista de procesos identificados con el trabajo de base industrial”*

*En igual medida, la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-008 de 1992 respecto al derecho al desarrollo, precisó varias de sus características tales como: (i) su clasificación histórica como derecho de tercera generación, (ii) su carácter solidario, (iii) su origen predominantemente internacional y (iv) su titularidad, la cual recae en la humanidad considerada globalmente. En ese sentido la citada providencia afirmó lo siguiente:*

*“Derechos de la Tercera Generación. La componen los derechos a la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y social. Se diferencian estos derechos de los de la primera y segunda generación en cuanto persiguen garantías para la humanidad considerada globalmente. No se trata en ellos del individuo como tal ni en cuanto ser social, sino de la promoción de la dignidad de la especie humana en su conjunto, por lo cual reciben igualmente el nombre de derechos "Solidarios". Su carácter solidario presupone para el logro de su eficacia la acción concertada de todos los "actores del juego social": El Estado, los individuos y otros entes públicos y privados. Estos derechos han sido consagrados por el Derecho Internacional Público de manera sistemática en varios Tratados, Convenios y Conferencias a partir de la década de los setenta del presente siglo y por las constituciones políticas más recientes”. (Negrilla y subraya fuera de texto)*

*Como se manifestó anteriormente, el derecho al desarrollo depende de distintas variables las cuales permiten que en un contexto determinado un país garantice el mejoramiento del bienestar de toda su población. Ahora bien, sin el objeto de ser simplistas o de reducir la naturaleza de este derecho a su mínima expresión, es claro, que en gran medida la oportunidad de contar con importantes recursos económicos permite a los Estados avanzar en la consolidación de esta garantía internacional.*

1. **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Cfr. ROMERO Xiomara *La síntesis de dos opuestos - derecho al desarrollo y pobreza.* Ver en: <https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName=La%20sintesis%20de%20dos%20opuestos%20-%20Derecho%20al%20desarrollo%20y%20pobreza.pdf>

Bolognesi, C., Parrini, M., Merlo, F., & Bonassi, S. (1993). Frequency of micronuclei in lymphocytes from a group of floriculturists exposed to pesticides. *Journal of Toxicology and Environmental Health*. https://doi.org/10.1080/15287399309531807

DANE. (2018). CENSO 2018. Tercer reporte. Retrieved from https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos

Defensoria. (2014). *Boletín sobre derechos de los grupos étnicos Enfoque Diferencial*. Bogotá. Retrieved from www.defensoria.org.co

Defensoria del Pueblo. (2015). *Derechos de los campesinos colombianos*. Bogota. Retrieved from www.defensoria.gov.co

Dejusticia. (2018). La Declaración de Derechos Campesinos sí podría proteger al campesinado colombiano | Dejusticia. Retrieved from https://www.dejusticia.org/la-declaracion-de-derechos-campesinos-si-podria-proteger-al-campesinado-colombiano/

Díez Jiménez, A. (2014). El estudio de la migración internacional de retorno en Colombia. Una revisión bibliográfica sobre el estado actual. *Revista Amauta*.

Echavarría, J., & Villamizar-Villegas, M. (2017). *Impacto del crédito sobre el Agro en Colombia: Evidencia del nuevo Censo Nacional Agropecuario*. Whashington. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18235/0000836

Eddleston, M., Karalliedde, L., Buckley, N., Fernando, R., Hutchinson, G., Isbister, G., … Smit, L. (2002). Pesticide poisoning in the developing world - A minimum pesticides list. *Lancet*. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11204-9

FAO. (2008). *Grasas y ácidos grasos en nutrición humana Consulta de expertos*. *Estudio FAO alimentación y nutrición*. https://doi.org/978-92-5-3067336

FAO, E., & OMS, E. (2006). Probióticos en los alimentos Propiedades saludables y nutricionales y directrices para la evaluación. *Estudios FAO Alimentación y Nutrición*.

Freedman, P. (2000). La resistencia campesina y la historiografía de Europa medieval. *Edad Media: Revista de Historia*.

Gaviria, J. . (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. *Dialnet.Unirioja.Es*, *53*, 53–62. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6213576

Hirschman, A. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en colombia. *Revista de Economia Institucional*.

ICANH. (2017). *Elementos para la conceptualización de lo “campesino” en Colombia.* Bogotá. Retrieved from https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-técnico-del-Instituto-Colombiano-de-Antropología-e-Historia-ICANH.pdf

INDH, P. (2011). *Colombia rural Razones para la esperanza*. Bogotá. Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-ic\_indh2011-parte1-2011.pdf

López, C., & Cano, M. C. (2011). En torno a los primeros poblamientos en el noroccidente de Sudamérica: acercamientos desde el valle interandino del Magdalena, Colombia. *Boletín de Antropología PUCP*.

Machado, A. (2009). La reforma rural, una deuda social y política. *Centro de Investigaciones Para El Desarrollo*.

Manrique-Abril, R. (2008). LAS FORMACIONES VEGETALES DE TUNJA Y SU RELACION CON EL HOMBRE PREHISPANICO E HISPANICO. *Agenf.Org*, *3*, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1909/shs.v3i3.118

Matijasevic Arcila, M., & Ruiz Silva, A. (2012). Teorías del reconocimiento en la comprensión de la problemática de los campesinos y las campesinas en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*.

MININTERIOR. (2016). *El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del conflicto armado*. Bogotá. Retrieved from www.mininterior.gov.cowww.mininterior.gov.co

ONU. (2018). *Human Rights Council Draft United Nations declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas*. Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session5/A-HRC-WG.15-5-3.pdf?platform=hootsuite

Ospina, J. M., Manrique-Abril, F. G., & Ariza, N. E. (2009). Intervención Educativa sobre los Conocimientos y Prácticas Referidas a los Riesgos Laborales en Cultivadores de Papa en Boyacá, Colombia. *Revista de Salud Pública*. https://doi.org/10.1590/s0124-00642009000200003

Palacios, M., & Safford, F. (2002). *Colombia : país fragmentado, sociedad dividida : su historia*. *Colección Vitral*.

Restrepo-Yepes, O. (2011). La protección del derecho alimentario en Colombia: descripción y análisis de las políticas públicas sobre alimentación y nutrición desde 1967 a 2008. *Opinión Jurídica*, *10*(20), 47–64. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/543

Salemme, M., & Miotti, L. (2004). Poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadoras-recolectoras de Patagonia. *Complutum*. https://doi.org/10.5209/CMPL.30764

Secretaria de Salud Bogota. (2012). *Enfoque Diferencial*. Bogotá. Retrieved from http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/boletines\_2012/COVE/ABRIL/ENFOQUE\_DIFERENCIAL.pdf

UPRA. (2015). *Proyectos-Distribución de la propiedad rural Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras* (Rendicionde cuentas). Bogotá. Retrieved from https://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/Proyectos+Distribución+de+la+Propiedad+de+la+propiedad.pdf/d78e382c-77ac-4d60-9cfd-da42fb5be8b9

Por los honorables congresistas,

1. “En suma, todas aquellas comunidades que dependen de los recursos del medio ambiente, merecen una especial atención por parte de los Estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayoría de bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentación y a su mínimo vital”. Corte Constitucional. Sentencia T-348 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt). reiterada por la sentencia T-606 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Es evidente que el sustento de la población campesina, comprendido como la consecución de los elementos materiales básicos para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, depende de la explotación económica de la tierra rural.  El desplazamiento forzado impide, por ende, que la población campesina víctima del mismo garantice su derecho al mínimo vital. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2011. (M.P. Luis Ernesto Vagas Silva). [↑](#footnote-ref-2)
3. “Los derechos a ejercer profesión u oficio y al trabajo tienen, un carácter instrumental desde el punto de vista del derecho al mínimo vital ya que permite a la persona garantizarse una calidad de vida acorde con sus intereses”. Corte Constitucional. Sentencias SU-111 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1735 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-054 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-552 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-438 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt). [↑](#footnote-ref-3)
4. “Las realidades expuestas no son ajenas a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como se mencionó al inicio de las consideraciones, el derecho al ambiente sano y al desarrollo sostenible está atado al reconocimiento y a la protección especial de los derechos de las comunidades agrícolas, a trabajar y subsistir de los recursos que les ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre el que garantizan su derecho a la alimentación [Sentencia T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz]. Las prácticas y actividades que desarrollan tradicionalmente hacen parte de su desarrollo de vida y, de alguna manera, esa relación entre el oficio y el espacio en el que lo desarrollan y subsisten, los constituye como comunidades con una misma identidad cultural.”. T-438 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt), reiterada por la sentencia T-606 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.) [↑](#footnote-ref-4)
5. “Artículo 1. Definición de campesino: Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.” *Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales*. Asamblea General de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/WG.15/1/2. [↑](#footnote-ref-5)
6. El artículo 25, que dispone que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”; el artículo 26 regula, entre otros asuntos, la libertad de escogencia de la profesión u oficio productivo; el artículo 39 autoriza expresamente a los trabajadores y a los empleadores a constituir sindicatos y asociaciones para defender sus intereses; los artículos 48 y 49 establecen los derechos a la seguridad social en pensiones y en salud, entre otros, de los trabajadores dependientes e independientes; el artículo 54 reconoce la obligación del Estado de propiciar la ubicación laboral a las personas en edad de trabajar y de garantizar a las personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud; el artículo 64 regula el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y la efectividad de varios derechos de los campesinos y los trabajadores agrarios y el artículo 334 establece como uno de los fines de la intervención del Estado en la economía el de dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básico. Cf. Corte Constitucional. Sentencia C- 614 del 2009. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt). [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Constitucional. Sentencia C-107 del 2002. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). [↑](#footnote-ref-7)